Convocada huelga por CC.OO. y U.G.T. de Málaga en todas las empresas encargadas de la limpieza de edificios y locales de la provincia de Málaga, los días 9, 10, 11 con carácter de intermitente y los días 13, 14, 15, 20, 21, 22 de mayo de 1991, afectando a todos los trabajadores de la citada actividad, el carácter de Servicio Público esencial para la Comunidad prestado por este colectivo, justifica que no pueda paralizarse totalmente su actividad por el ejercicio del derecho de huelga.

De lo anterior se infiere la potestad de imponer limitaciones al ejercicio del derecho de huelga en los servicios esenciales de la Comunidad, mediante la adopción de las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de dichos servicios intentando a la vez compatibilizar los intereses generales del conjunto de la Comunidad con los derechos individuales que asisten al colectivo declarante de la huelga. A fin de salvaguardar los derechos y bienes protegidos constitucionalmente sobre los que repercute la huelga en defensa de la salud y de la vida, por Orden de las Consejerías de Trabajo y de Salud de 2 de mayo de 1991, se establecieron servicios mínimos para garantizar el funcionamiento del servicio público que prestan las empresas encargadas de la limpieza de edificios y locales en establecimientos públicos de Sanidad. No obstante ello, dada las características de la huelga y su duración, se ha constatado la pérdida de salubridad en los centros públicos de enseñanza dependientes de la Consejería de Educación y Ciencia, lo que no sólo conculca el bien esencial de salubridad de todos, sino que también el derecho a la educación, bienes constitucionalmente protegidos, que hacen necesario garantizarlos mediante el establecimiento de servicios mínimos para el último tramo de la huelga citada.

De acuerdo con la que disponen los artículos 28.2 y 43 de la Constitución; el artículo 10.2 del Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo, el artículo 17.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, Sentencias del Tribunal Constitucional de 8 de abril y 17 de julio de 1981; Real Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre y de conformidad con lo establecido por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 5 de octubre de 1983,

DISPONEMOS

Artículo 1º. La situación de huelga que afectará a todas las trabajadoras de las empresas Encargadas de la Limpieza de Edificios y Locales de la Provincia de Málaga los días 20, 21, y 22 de mayo de 1991, deberá ir acompañada del mantenimiento de los Servicios Mínimos que figuran en el Anexo de la presente Orden,

sin perjuicio de los fijados por la Orden de las Consejerías de Trabajo y Salud de fecha 2 de mayo.

Artículo 2º. Los paros y alteraciones en el trabajo por parte del personal necesario para el mantenimiento de los servicios esenciales mínimos determinados serán considerados ilegales a los efectos del artículo 16.1 del Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo.

Artículo 3º. Los artículos anteriores no supondrán limitación alguna de los derechos que la normativa reguladora de la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni tampoco responderán respecto de la tramitación y efectos de las peticiones que lo motiven.

Artículo 4º. Sin perjuicio de lo que establecen los artículos anteriores, deberán observarse las normas legales y reglamentarias vigentes en materia de garantías de los usuarios de los establecimientos sanitarios.

Artículo 5º. La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 17 de mayo de 1991

FRANCISCO OLIVA GARCIA
Consejero de Trabajo

ANTONIO PASCUAL ACOSTA
Consejero de Educación y Ciencia

ANGEL MARTIN-LAGOS CONTRERAS
Consejero de Gobernación

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Ilmo. Sr. Director General de Ordenación Educativa.
Ilmo. Sr. Director General de Formación Profesional y Enseñanzas Especiales.
Ilma. Sr. Director General de Administración Local y Justicia.
Ilmas. Srs. Delegados Provinciales de las Consejerías de Trabajo, Educación y Ciencia y de Gobernación de Málaga.

ANEXO

1 Limpiadora por cada Centro Público de Educación dependiente de la Consejería de Educación y Ciencia.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ORDEN de 15 de mayo de 1991, por la que se convocan para 1991 las subvenciones destinadas al Fomento de Actividades, Programas y Proyectos de Cooperación al Desarrollo que realicen las Asociaciones y Organizaciones Gubernamentales.

La Junta de Andalucía en el marco del Convenio de Colaboración establecido el 10 de mayo de 1989 con la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) ha decidido dar continuidad al Programa de Cooperación con los países en vías de desarrollo iniciado el pasado año.

Así pues, se ha aprobado una línea de ayudas encuadradas operativamente en los presupuestos ordinarios de la Consejería de la Presidencia, concretamente en la aplicación presupuestaria 01.01.481.11.A para la financiación de las actividades cuya finalidad sea la cooperación internacional con los pueblos menos favorecidos del tercer mundo.

La Junta de Andalucía valorando la iniciativa social en este campo y a fin de consolidar el papel de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en la cooperación al desarrollo, convoca las ayudas y subvenciones siguientes manteniendo criterios objetivos en su colaboración.

Por ello, esta Consejería en virtud de lo establecido en el art. 19.2 de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 1991 ha dispuesto:

ARTICULO 1:

La Consejería de Presidencia, con cargo a sus presupuestos de 1991 podrá conceder ayudas y subvenciones a Asociaciones y Organizaciones no gubernamentales españolas para la

realización y fomento de actividades de cooperación internacional al desarrollo.

ARTICULO 2.

Para poder concurrir a las ayudas y subvenciones del artículo anterior, las Asociaciones y Organizaciones No Gubernamentales deberán cumplir los siguientes requisitos:

- Tener como fines institucionales la realización de actividades de cooperación al desarrollo y el fomento de la solidaridad entre los pueblos.
- Estar constituida al amparo de lo que dispone el artículo 22 de la Constitución y demás disposiciones legales.
- No perseguir fines de lucro o comerciales ni depender económica o institucionalmente de entidades lucrativas.
- Disponer de la estructura necesaria y suficiente para garantizar el cumplimiento de sus objetivos acreditando la experiencia operativa indispensable para ello.

ARTICULO 3:

Se concederán subvenciones y ayudas para las siguientes actividades:

- Desarrollo de programas y proyectos propios de las Asociaciones y ONG que se lleven a cabo en países en vías de desarrollo y que favorezcan la justicia social y la mejora de las condiciones de vida de la población.
- Realización de actividades tales como seminarios, reuniones de coordinación, trabajos de investigación y promoción de la cooperación al desarrollo, formación

Y cuantas contribuyan al fomento y difusión de los valores inherentes a la cooperación internacional.

ARTICULO 4:

El plazo para la presentación de solicitudes finalizará al mes de la publicación de la presente orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

ARTICULO 5:

Las Asociaciones y ONG que concurren a la presente convocatoria deberán presentar la siguiente documentación:

- a. Instancia en la que se contenga la petición concreta de las cantidades que se soliciten, acompañada del Proyecto de las acciones que se pretenden ejecutar.
- b. Copia compulsada de los Estatutos de la institución.
- c. Inscripción en el Registro de Asociaciones.
- d. Fotocopia compulsada de la tarjeta de identificación Fiscal.
- e. Poder bastanteado por el Gabinete Jurídico de la Consejería de la Presidencia de representación del solicitante.
- f. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad de la persona que firma en nombre de la Asociación.
- g. Documentación acreditativa de estar al día en las cotizaciones de la Seguridad Social y en las obligaciones tributarias en su caso.
- h. Memoria de la institución de 1990.

ARTICULO 6:

En los proyectos de cooperación al desarrollo se harán constar los siguientes datos:

- a. Título, objetivos, antecedentes, resumen (acciones concretas, localización, calendarios, organismos o entidad receptora), país destinatario, duración, sector, coste y financiación, resultados previstos y medios materiales y humanos.
- b. Relación de personal afecto al proyecto o programa haciendo constar nombre, apellidos, DNI, retribución y número de afiliación a la Seguridad social, en su caso.
- c. Cauces o sistemas de evaluación, seguimiento periódico e informe final, destinados a facilitar los controles y evaluaciones que oportunamente se determinen.

ARTICULO 7:

La Consejería de la Presidencia tramitará los expedientes pudiendo según lo que dispone el artículo 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo, requerir a la Entidad solicitante para que subsane o complete la documentación presentada.

ARTICULO 8:

La Dirección General de Asuntos Comunitarios procederá a la selección y la valoración de los proyectos y solicitudes presentados, previa deliberación, pudiendo recabar en la misma la presencia de aquellos Departamentos y expertos que según la índole del programa, así lo aconsejen.

ARTICULO 9:

La Consejera de la Presidencia a propuesta de la Dirección General anteriormente citada, dictará la oportuna resolución concediendo, en todo o en parte, o denegando la solicitud formulada, quedando sujeta la concesión de la ayuda o subvención a la existencia de crédito presupuestario previo. En la Resolución de concesión de ayuda o subvención constará la modalidad y forma de pago de la dotación concedida.

ARTICULO 10:

1. Las entidades que perciban ayudas o subvenciones, sin perjuicio de las disposiciones legales en la materia, quedan en todo caso, obligadas a :
 - a. Presentar justificación del gasto, de modo fehaciente en el plazo de dos meses, contados desde la fecha de finalización del plazo para la ejecución de la actividad o proyectos subvencionados cuyo cómputo, a su vez, se iniciará en el momento en que se haga el pago de la subvención.

En la justificación deberán incluir copia de los

contratos y de las nóminas firmadas por los cooperantes, voluntarios o personas que hayan participado en las actividades, programas o proyectos, justificantes de la Seguridad Social y facturas acreditativas con el correspondiente "recibí" acorde a las peticiones solicitadas.

- b. Acompañar un informe detallado al término del programa o proyecto subvencionado que incluya certificaciones en las que consten la realización de los objetivos conseguidos en relación a los consignados en la solicitud de subvención.
 - c. Elaborar durante la ejecución de las actividades subvencionadas un informe semestral acerca del estado de las mismas.
2. La omisión de estos requisitos implicará la inhabilitación para la percepción de nuevas subvenciones y la devolución de la totalidad o parte de la ayuda, mediante Resolución de la Consejera y previa audiencia de los interesados, en su caso. Se procederá asimismo a la devolución de la ayuda en el caso de modificación sustancial de la actividad, programa o proyectos subvencionados sin autorización previa.

DISPOSICION FINAL.

La presente orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 15 de mayo de 1991

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de la Presidencia

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 17 de abril de 1991, por la que se ordena el cumplimiento en sus propios términos de la Sentencia de 21 de marzo de 1990, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia en Andalucía, recaída en el Recurso núm. 3294/1988.

En el recurso contencioso-administrativo núm. 3294/1988, interpuesto por OPERIBERICA, S.A., contra Resolución de la Consejería de Gobernación de 6 de octubre de 1987, sobre infracción o la normativa de juego, expediente núm. 244/87-M, ha recaído sentencia el 21 de marzo de 1990 pronunciada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, cuyo fallo es del siguiente tenor literal:

FALLAMOS:

Que debemos estimar y estimamos el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador Romero Villalba, en nombre de OPERIBERICA, S.A., contra resolución del Consejero de Gobernación de la Junta de Andalucía, desestimatoria por silencio administrativo de recurso interpuesto contra otra, de 6 de octubre de 1987 del Delegado de la citada Consejería en Cádiz por la que se imponía al recurrente una sanción de 15.000 pesetas; que anulamos por ser contrarios al Ordenamiento Jurídico; con devolución del importe de la sanción en el caso que hubiere sido hecho efectivo, incluidos los intereses de lo indebidamente pagado.

En consecuencia, esta Consejería, de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ordena:

Primero: La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del fallo que ahora se transcribe.

Segundo: El cumplimiento de la expresada sentencia en sus propios términos.

Sevilla, 17 de abril de 1991

ANGEL MARTIN-LAGOS CONTRERAS
Consejero de Gobernación